

LA ORDENACION TERRITORIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS



INTRODUCCION

A la hora de escribir este artículo nos encontramos con un pequeño desafío: la síntesis de cómo se entiende y qué se está haciendo en materia de ordenación territorial en el Principado de Asturias, dirigido a un colectivo mayoritariamente formado por arquitectos radicados en Madrid y que, no necesariamente, tienen que conocer bien esta región norteña.

Partamos de la base de que, en el contexto de la acción de gobierno regional, parece necesaria una acotación de qué se entiende por ordenación del territorio, no sólo circunscrita a los consabidos repartos competenciales interadministrativos que han ilustrado decenas de artículos y ponencias en los distintos gremios relacionados con la política territorial sino desde una perspectiva más real.

A los efectos anteriores, entre cuatro clásicos interrogantes cuya solución y combinación conforman la vida administrativa (y pongamos como ilustración un ejemplo de construcción): qué (el tipo de obra), cuánto (el tamaño), cuándo (en qué ejercicio) y cómo (la técnica), no cabe ya obsesionarse por la coordinación en el "cuándo", es decir, por la programación, necesariamente sectorializada en cada campo administrativo y que hace disolverse el concepto globalizador y agregador intervariables de la ordenación territorial por puramente inasequible (y por supuesto indeseable), sino, más bien por el "cómo", lo que exigiría una serie de consideraciones bastante extensas en torno al importante cometido a desempeñar por las Administraciones regionales en materia de planificación/ordenación territorial. En aras a la brevedad del artículo no entramos en dichas consideraciones.

FERNANDO ARROJO

LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION
DEL TERRITORIO APLICABLES EN ASTURIAS

Descendiendo a lo concreto, efectuamos un rápido repaso a los instrumentos de ordenación territorial en desarrollo en nuestra región:

La aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo
y ordenación urbana

De los 78 municipios que integran el territorio asturiano, 60 tienen ya su planeamiento urbanístico general definitivamente aprobado. En términos de población ello supone más del 90 % del total regional, entre los que se encuentran los municipios más poblados: Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo, Siero (todos ellos, junto con Castrillón, en el área central de la región y con Plan General de Ordenación Urbana) el resto con Normas Subsidiarias. A fin de dar una idea del enorme impulso que desde la Administración regional se ha dado al planeamiento municipal —mediante subvenciones o redacción por los servicios técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio—, baste señalar que a principios de 1983 sólo se encontraban en vigor cinco planeamientos adaptados a la Ley del Suelo: el Plan General de Mieres y las Normas Subsidiarias de Cangas de Onís, Piloña, Pravia y Salas.

En cuanto al desarrollo de este planeamiento general —también impulsado desde la Administración regional— no cabe hablar de un panorama tan alentador. Aun sin proporcionar cifras, señalemos que el planeamiento parcial y especial, como en el resto del país, se desarrolla con lentitud. En ello se indicará más adelante.

Las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias (NURMR) como caso singular de aplicación de la Ley del Suelo

Las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias, aprobadas por Resolución del consejero el 29 de diciembre de 1983, entraron en vigor el 31 de enero de 1984, al ser publicado su texto en el Boletín Oficial del Principado, con el carácter de normas subsidiarias del planeamiento en el ámbito asturiano. Es decir, que estarán vigentes y serán de obligado cumplimiento hasta el momento en que todo el territorio asturiano haya aprobado definitivamente su planeamiento municipal, bien a nivel de Plan General o de Normas Subsidiarias, según los casos.

Aun sin entrar en la referencia particularizada a este cuerpo normativo (147 artículos más un anexo), conviene reproducir los objetivos expuestos en la memoria justificativa de las NURMR:

a) Proteger los recursos naturales, evitando su deterioro en las zonas de mayor crecimiento y demanda, y estableciendo medidas cautelares allí donde estos recursos existan, aun cuando todavía no se haya iniciado ninguna amenaza concreta sobre los mismos. El mejor suelo, las tierras cultivables, las masas forestales, el paisaje, los recursos acuíferos, los bosques relictos, etc., forman en Asturias, además de la base de su riqueza natural, parte fundamental de su acervo cultural y de su definición regional. Su pérdida, irrecuperable en la práctica totalidad de los casos, y su carácter de recurso escaso, ha hecho que se haya producido una creciente concienciación social del valor de los mismos que una normativa subsidiaria de ámbito regional, como la que aquí se aborda, debe obligadamente contemplar.

b) Controlar el crecimiento en el medio rural, evitando las actividades no compatibles con el mismo, no solamente por la manifiesta amenaza que para él suponen como factor destructor del medio, sino, y, sobre todo, en las áreas de crecimiento rápido, por la falta de estructura urbana que origina, con graves problemas de servicios, abastecimiento y equipamientos.

c) Conseguir, por tanto, que las actividades permisibles no produzcan impactos negativos en la naturaleza.

d) Permitir el mantenimiento de los núcleos rurales, creando medidas precisas para un crecimiento acorde con sus características netamente rurales, a fin de evitar el abandono del campo y la pérdida de valores culturales y sociales.

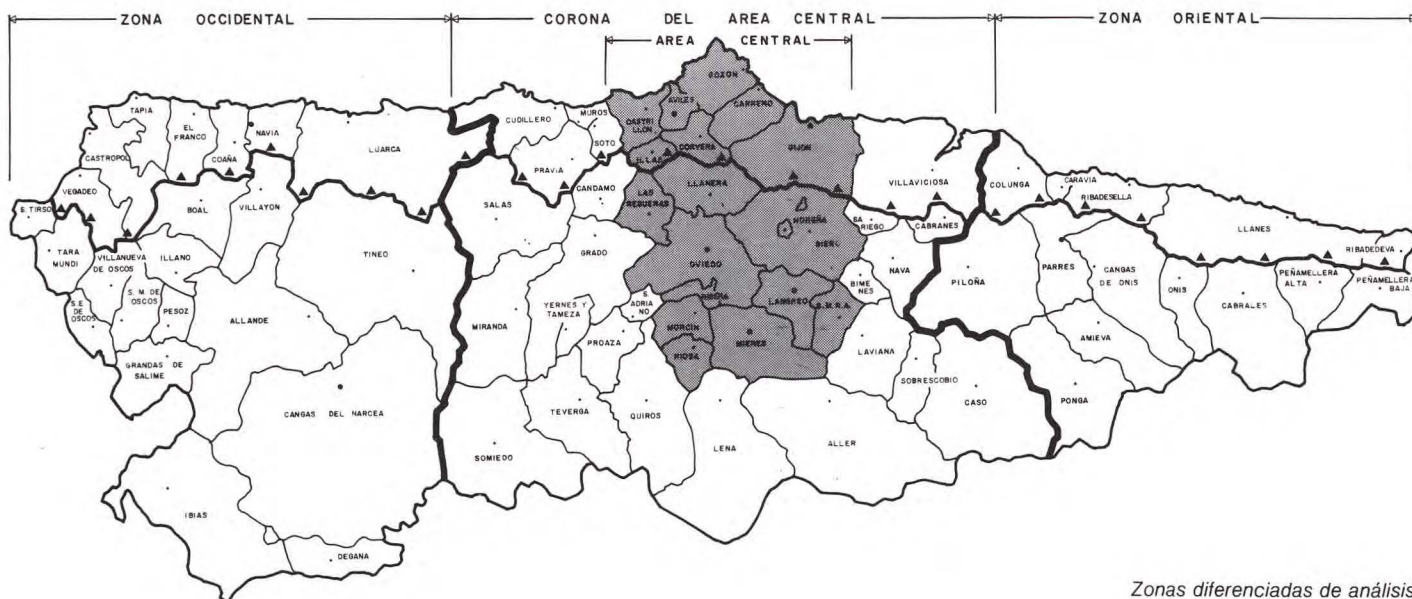
e) Eliminar, mediante unas políticas precautorias precisas, expectativas urbanísticas inadecuadas para la naturaleza del suelo no urbanizable.

f) Evitar, en definitiva, la ambigüedad interpretativa de la Ley del Suelo por parte de la Administración Local y Autonómica en cuanto a sus permisibles e intensidad de los mismos en el suelo no urbanizable, creando un marco de referencia común.

Los parámetros de regulación detallada de las NURMR (tamaño de parcela, ocupaciones máximas, retiros a linderos, etc.), así como las condiciones generales sobre los usos (permitidos, autorizables y prohibidos) han sido tomados por la mayor parte del planeamiento municipal (o, en su caso, han sido reconducidos a ello por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) con lo que estas Normas regionales han servido como elemento “horizontalizador” del planeamiento municipal asturiano.

El anteproyecto de Ley de Adaptación Urbanística

Se señala aquí como instrumento virtual de ordenación del territorio la adaptación de algunos aspectos de la legislación estatal sobre el suelo y la ordenación urbana en el ejercicio de las competencias legislativas propias del Principado en materia



Zonas diferenciadas de análisis.

de urbanismo, como ya se hizo con la Ley 3/87 reguladora de la disciplina urbanística.

Este anteproyecto está actualmente a la espera de la promulgación de la Ley estatal de reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, pues de ella se derivarán nuevas posibilidades de desarrollo legislativo autonómico sobre el nuevo contenido del derecho de propiedad del suelo que regulen los poderes centrales.

Al margen de lo anterior, el actual anteproyecto de ley asturiano incide en aspectos tales como:

- Instrumentos y criterios para potenciar la mancomunidad urbanística a efectos de planeamiento y gestión urbanística.
- Regulación de algunos aspectos generales sobre el suelo no urbanizable. Entre ellos define legalmente el núcleo rural con lo que consolida normativamente esta figura de asentamiento ya regulada desde las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias a las que hemos hecho referencia anteriormente.
- Simplificación de las figuras de planeamiento y gestión de la Ley del Suelo y sus reglamentos, tanto en desarrollos residenciales como industriales, a fin de adaptarlos a la escala "menor" del territorio asturiano. Ello ha sido motivado por el escaso desarrollo del planeamiento urbanístico general aproba-

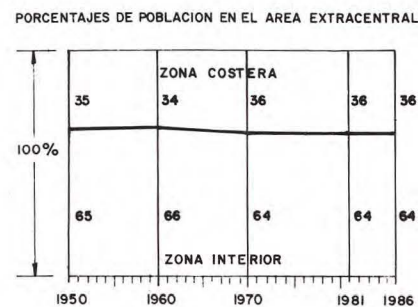
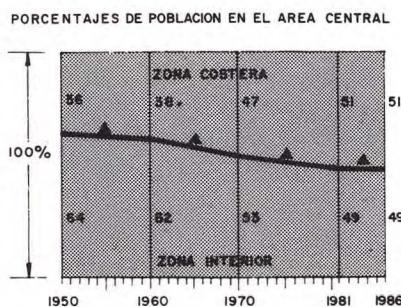
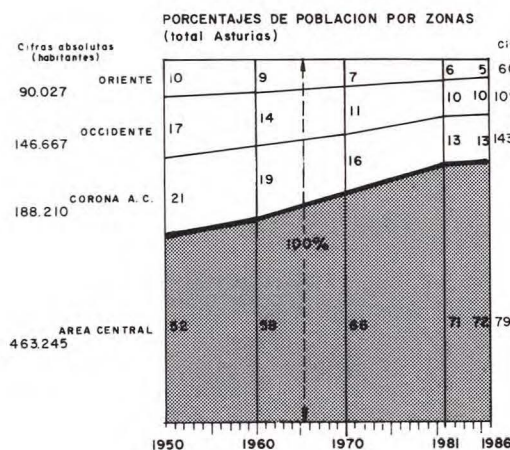
do definitivamente, sobre todo en lo que se refiere a los planes parciales previstos en los suelos aptos para urbanizar de las capitales de municipios más rurales, amén del también lento desarrollo de los planes generales en los núcleos urbanos primaciales de la región.

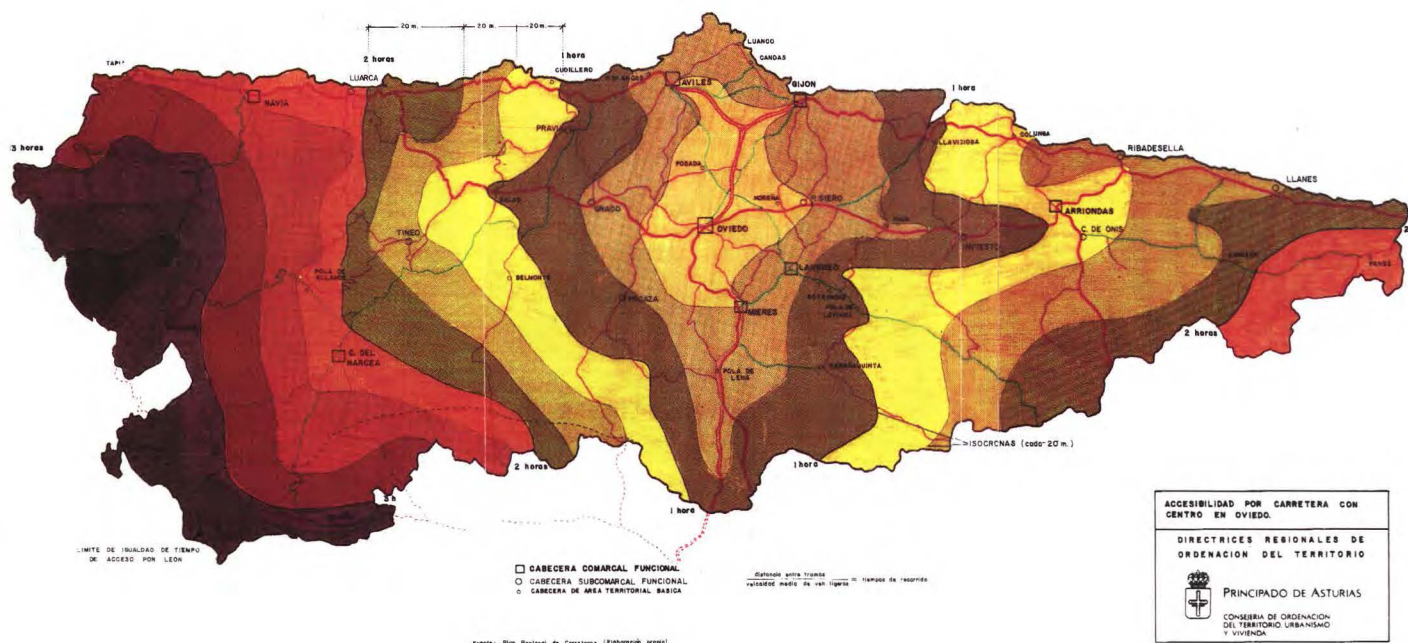
La Ley 1/87 de Coordinación y Ordenación Territorial

La promulgación de la Ley de Coordinación y Ordenación Territorial, vigente desde abril de 1987, ha hecho posible que el Principado de Asturias cuente con un marco legal propio para abordar la tarea de la ordenación territorial de la región.

A pocos conocedores de estas materias territoriales se les escapa que Asturias no ha sido original ni pionera en la "puesta en el mercado" de instrumentos de ordenación del territorio como Directrices o Programas de Actuación. La Ley 10/1984 de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid ha sido, ciertamente, inspiradora de la Ley asturiana, y ello responde, simplemente, a que con territorios de configuración espacial y demográfica muy diferentes se comporte una misma filosofía de actuación territorial.

En las coordenadas y literalidad de la Ley 1/87 de Coordinación y Ordenación Territorial (LCOT), "las Directrices de Ordenación del Territorio son el instrumento expresivo de los





finés y objetivos de la política territorial del Principado, constituyendo el principal elemento de planificación y coordinación territorial y la base para el desarrollo de las actuaciones con impacto que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma" (art. 4 LCOT).

Los Programas de Actuación Territorial que se elaboren en desarrollo de las Directrices, representan la fase de concreción de conjuntos de actuaciones a desarrollar por la Administración regional, especificando sus plazos y costes.

Las Evaluaciones de Impacto van dirigidas a valorar la incidencia de acciones concretas en el medio físico (impacto ambiental) y, en el sistema de núcleos de población, infraestructuras, equipamientos y servicios (impacto estructural).

LAS DIRECTRICES REGIONALES COMO ELEMENTO MATRIZ DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El acuerdo de redacción de unas Directrices Regionales de Ordenación del Territorio fue tomado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el 26 de noviembre de 1987. Un Avance de Directrices fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) el 28 de octubre de 1988 y actualmente —últimos de mayo— se está completando el documento para aprobación inicial. Faltan, pues, en esta larga andadura procedimental, la aprobación provisional y definitiva, ésta por Decreto del Consejo de Gobierno, para que las Directrices comiencen a tener una aplicación real en el campo administrativo.

Efectuemos un extracto del Avance aprobado por la CUOTA:

Una previa síntesis del diagnóstico regional

Asturias es una región suficientemente estudiada a nivel territorial y socioeconómico como para definir en ella claras situaciones de partida, pudiéndose distinguir con bastante nitidez dos grandes ámbitos territoriales: la zona central y las

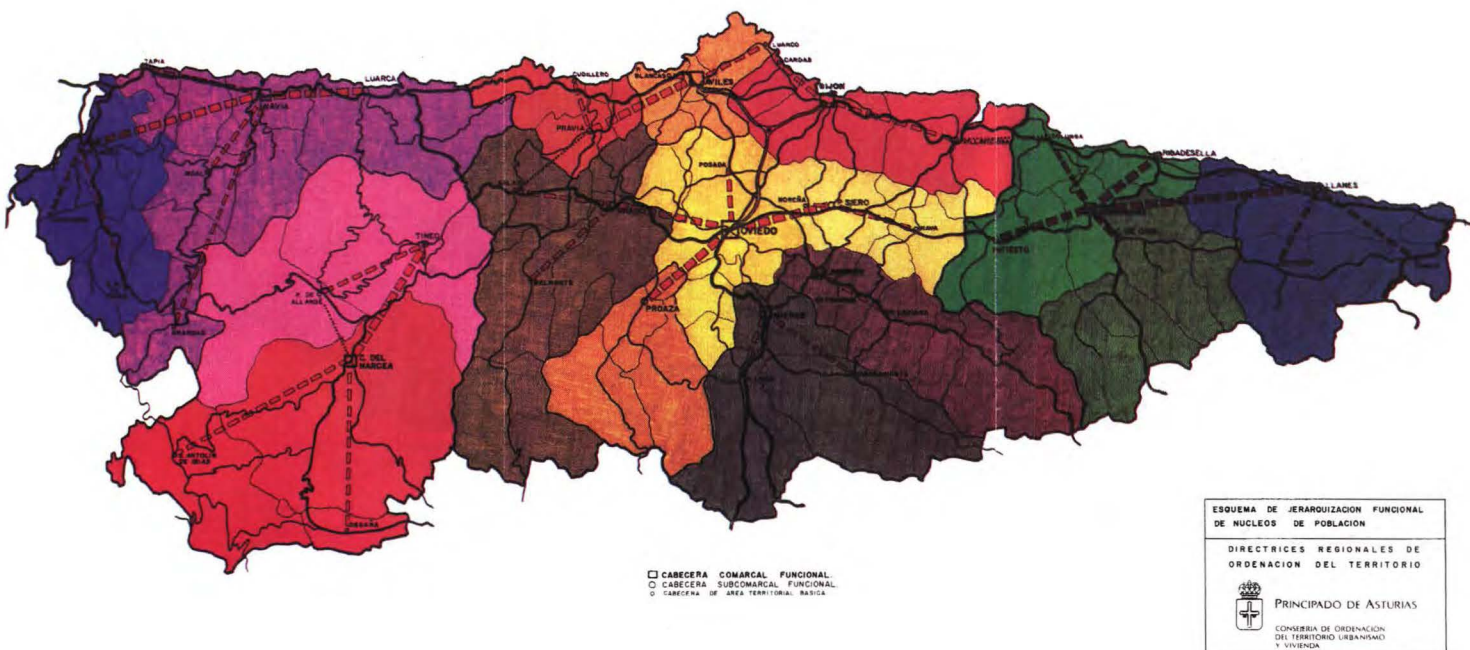
periferias sur, oriente y occidente, con características y problemática netamente diferenciadas a la hora de abordar su ordenación territorial desde el ámbito supramunicipal y dentro de una estrategia de desarrollo regional concebida para el Principado en su conjunto.

El subsistema territorial del área central es un espacio denso y no uniformemente poblado, con una potente infraestructura de transporte articulada en relación con sus principales núcleos urbanos —Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres y Langreo—, los cuales, manteniendo sus características diferenciales según sus respectivas especializaciones —predominantemente terciarias y, en menor medida, industriales— tienden cada vez más a funcionar como un área única y multinucleada —sin centro claramente preponderante— con fuertes interrelaciones que, en gran parte de los casos, llegan a la interdependencia. En dicho subsistema el medio rural ha pasado de ser un espacio residual en expectativa de urbanización, a constituir un conjunto de piezas a potenciar en sus funciones agrarias y a preservar adecuadamente en relación con sus respectivos entornos urbanos.

La Asturias de las periferias sur, oriente y occidente presenta unas características de muy diferente cariz. Es un conjunto de áreas dispersas y débilmente conexas entre sí, sobre un territorio en su mayor parte agreste, de baja densidad de población y base fundamentalmente rural y agraria. En esta amplia zona, el sistema de núcleos de población carece de una jerarquía claramente definida, y no está apoyado, por el momento, en una adecuada red de comunicaciones que le dote de los deseables niveles de accesibilidad.

En el esquema adjunto se muestran los grandes rasgos de la evolución de la población regional, como variable de síntesis de otros indicadores socioeconómicos, que responden a una triple tendencia, siempre del mismo sentido a lo largo del período de análisis 1950-1986:

a) Concentración de población en el área central (actualmente el 72 % de la población en un 14 % de la superficie regional).



b) Tendencia a la concentración en la zona costera, sobre todo por la celeridad de este proceso en el área central (gran crecimiento relativo de Avilés y su comarca y de Gijón, y mantenimiento o decrecimiento de las cuencas mineras en el período 1950-1986); en la zona extracentral la población costa/interior se mantuvo estable en este período.

c) Concentración de la población en las capitales municipales —efecto no señalado en el esquema de referencia— que aglutinan actualmente un 70 % de la población del área central y un 27 % de la población extracentral.

Una última característica esencial es la disminución de población total regional a partir de 1986, rompiendo por primera vez la tendencia intercensal de crecimiento desde el primer cómputo de 1887 y el acentuado y progresivo envejecimiento de las pirámides de población, sobre todo en las zonas rurales y zonas mineras en declive.

Otro elemento interesante del diagnóstico regional es la accesibilidad. Si consideramos la red viaria asentada en el Principado como soporte de la accesibilidad intrarregional (el ferrocarril RENFE sólo cubre la zona central y el FEVE no reúne un nivel de servicio adecuado en los extremos de la región) y tomamos a Oviedo como origen y como fuente de las medidas realizadas en el Plan Regional de Carreteras, observamos una clara descompensación: mientras en menos de dos horas se alcanza el límite con Cantabria, en ese tiempo no se accede ni a Lluarca ni a Cangas de Narcea, ambas en la zona occidental. Se observa también que a la zona suroccidental (Degaña, Pola de Somiedo...) se accede antes por León —autopista del Huerna— que a través del interior de la región.

Este factor, la accesibilidad, se presenta como clave en el apoyo a una fuerte política de descentralización de equipamientos y servicios, potenciando los núcleos de cabecera más periféricos y, por otra parte, recomienda, desde el exclusivo punto de vista de la ordenación del territorio, como más interesante para la región la solución interior de la futura autovía del Cantábrico —sobre todo en el tramo occidental, a pesar de

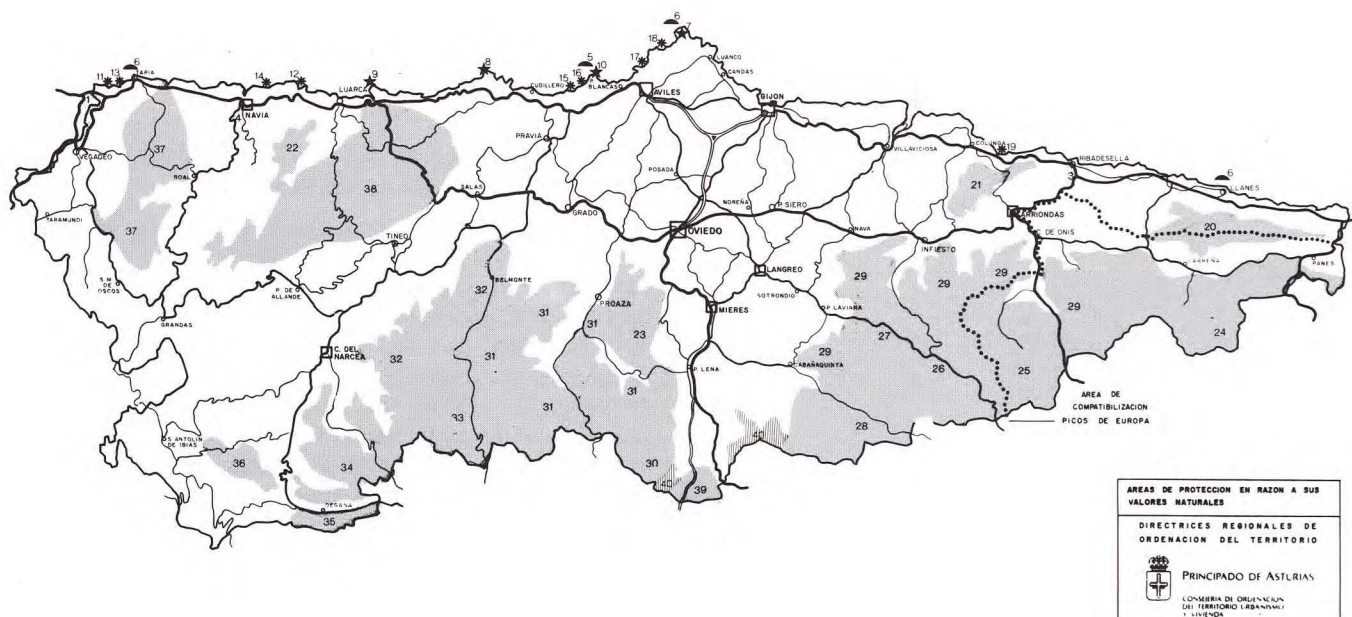
su superior coste— frente a la opción costera que dejaría la franja occidental con peor articulación territorial.

Planteamiento del objetivo de reequilibrio territorial

Al hilo de las referencias anteriores, los desequilibrios territoriales entre el centro y las periferias regionales —en el orden de la producción y renta, comunicaciones, equipamientos y calidad de vida en general— se han ido incrementando paulatinamente en las últimas décadas. El logro del reequilibrio territorial, por el que se produzca el necesario punto de inflexión en la tendencia a la concentración de los efectivos humanos y económicos en el área central —explicitado ya en el *preámbulo de la Ley de Coordinación y Ordenación Territorial*— no es un objetivo a corto ni a medio plazo, sino que necesita de una estrategia diseñada a más largo horizonte, cuyas líneas principales son de contenido fundamentalmente socioeconómico.

La zona central —en su conjunto— ha de actuar como motor que, en bastante medida puede arrastrar y generar un mayor desarrollo en las periferias regionales. El anterior supuesto responde a una opción estratégica de desarrollo regional, basada en una expansión económica sobre bases sólidas que permitan superar la actual crisis estructural de la zona central y contribuir, a medio y largo plazo, a la descentralización de actividades industriales y terciarias hacia las periferias regionales.

En línea con esta dinámica de irradiación de los flujos económicos del espacio central hacia su exterior, la dialéctica básica centro-periferias regionales giraría sobre el mantenimiento, en términos cuantitativos, del actual estado de distribución de población y empleo entre las distintas zonas del sistema multipolar central, sin que parezca deseable su crecimiento diferencial más o menos uniformemente repartido en este área respecto al resto regional. En este sentido, una estrategia territorial que tendiese, a largo plazo, a una progresiva ocupación del espacio central interior (coadyuvada, por ejemplo, con el efecto colonizador del espacio próximo a la autopista inducido por la localización indiscriminada de nuevos enlaces y conexiones viarias con ella), cortaría de hecho las posibilidades



de desarrollo de las alas y sur regionales, configurando de forma determinante al área central como un “sumidero” al que confluirían, aún en mayor medida, todos los flujos inversores del sector público y privado. No se trata, pues, de compactar el espacio central, sino de dinamizarlo mediante la conjugación de los objetivos económicos y territoriales en el área central y en el conjunto de la región.

Consideraciones sobre el enfoque y metodología de redacción del documento

Se parte de dos premisas básicas:

- Se debe producir un cambio cualitativo en la programación regional del territorio, ya que ni la suma de los planeamientos urbanísticos municipales, ni la superposición de las diferentes políticas sectoriales aplicadas a nivel regional, son suficientes para definir un adecuado sistema de relaciones espaciales y de uso del territorio.
- La programación regional del territorio (Directrices y Programas de Actuación Territorial) deben ser un elemento de contraste y referencia de las demás políticas, siendo su instrumentación un paso complejo, pero necesario, para definir un adecuado sistema de relaciones entre economía y naturaleza, como lo hicieron otros países y regiones que hoy disfrutan de un entorno más satisfactorio, coherente y equilibrado.

Y, asimismo, de que la Ley de Coordinación y Ordenación Territorial (LCOT) ofrece una amplia gama de posibilidades de aplicación en cuanto que las Directrices —y sus instrumentos de desarrollo (Directrices Subregionales, Sectoriales y Programas de Actuación Territorial) pueden constituir:

- Los instrumentos de formulación de la política territorial a aplicar en el Principado en su interpretación más expansiva y que, por tanto, supeditan completamente todas las políticas sectoriales con impacto o incidencia territorial (que son la inmensa mayoría).
- Una mera formulación de criterios y objetivos, más o

menos genéricos, que orienten la política territorial del Principado y las políticas sectoriales a desarrollar.

Entre ambos extremos cabe una amplia gama de supuestos, que asumiendo la estructura actual de la Administración —necesariamente sectorializada en sus distintos niveles— hacen optar por una hipótesis de enfoque de las Directrices, en principio, equidistante de las dos antedichas, pero, final y seguramente más próxima a la formulación de criterios y objetivos.

Como ilustración de la anterior disyuntiva, se reproduce íntegramente el contenido legalmente obligado para las Directrices:

- a) Diagnóstico de la estructura general del territorio contemplado y de las pautas de desarrollo territorial manifestadas o previsibles.
- b) Determinación de los objetivos y líneas de actuación que emanen de las distintas áreas analizadas tomando como referencias mínimas el medio físico, la población y la vivienda, la actividad económica, los equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de comunicación.
- c) Criterios de actuación, compatibilización, programación y tramitación coordinados entre las distintas Administraciones que actúan territorialmente en la región.
- d) Supuestos de actuación y revisión de las Directrices y Normas Específicas para su seguimiento.
- e) Señalamiento de las áreas de protección que deban establecerse, mantenerse o ampliarse atendiendo a su valor natural, cultural, social o económico, haciendo esencial referencia a los recursos agrícolas y forestales y a los cursos de agua, todo ello sin perjuicio de las delimitaciones específicas que puedan realizarse en aplicación de la legislación sectorial.
- f) Criterios de compatibilización del planeamiento urbanístico.
- g) Criterios para localización y ejecución de infraestructuras, equipamientos y servicios en general.
- h) Condiciones a que deban someterse las propuestas que por su carácter estructurante del territorio o incidencia supra-municipal así lo requieran.



i) Análisis de las relaciones de las Directrices con la planificación económica general del Principado.

Habida cuenta de que recientemente se ha redactado el Programa de Desarrollo Regional (PDR) para el período 1989-1993 sobre el mismo ámbito territorial y que éste contiene también un diagnóstico (epígrafe “a”) y unos objetivos (epígrafe “b”), no cabe sino —y así se ha hecho— configurar un documento de Directrices estrictamente concurrente y complementario con el PDR, realizando un especial esfuerzo en la definición de los aspectos más específicamente “territoriales” de la organización, desarrollo y ordenación territorial no definidos previamente por el PDR. Fundamentalmente en los siguientes:

- Definición del *esquema de nucleación regional* como polarizador de los distintos tipos de equipamientos e infraestructuras, que lejos de constituir un sistema de organización comarcal institucionalizado, racionalice la prestación de los servicios públicos y privados buscando el equilibrio entre la concentración de equipamientos y servicios (la economía de escala) y la necesaria desconcentración de los mismos en función del peculiar hábitat disperso de la región.

- Definición de las *áreas de protección* atendiendo a su valor natural, cultural, social o económico, como base para la implementación de medidas y articulación de programas de acción territorial, cuya finalidad sea la recuperación de ciertos entornos y así contribuir a entrever como real el “axioma” de que no hay, en el futuro, desarrollo económico si no existe un medio ambiente adecuado.

- La determinación de los tipos de actuaciones sujetos a estudio de impacto ambiental o/y estructural.

El contenido de las Directrices

La síntesis de las Directrices contenidas en el Avance —ahora más desarrolladas en el documento de aprobación inicial— es la siguiente:

Basadas en la jerarquización funcional de núcleos de población

1. Criterios sobre el tratamiento de las principales infraestructuras.

En esta Directriz se recogen las líneas de actuación aprobadas en la Junta General del Principado (Parlamento Regional) tras el debate sobre comunicaciones y transportes celebrado en julio de 1988. Generalmente se refieren a actuaciones cuya ejecución correspondería a la Administración Central y se refieren a la mejora de las comunicaciones norte-sur (incluyendo la variante ferroviaria de Pajares), este-oeste (nueva autovía cantábrica), autonomía portuaria de El Musel y Avilés, potenciación de los servicios FEVE como transporte suburbano, potenciación de los vuelos de tercer nivel, etcétera.

2. Esquema general de distribución de equipamientos de ámbito supramunicipal.

Contiene los criterios, muy generales todavía en el Avance, para la racionalización de los distintos tipos de equipamiento supramunicipal (educativo, cultural, deportivo, espacios libres

acondicionados, sanitario, bienestar social, comercial, hostelero, hotelero y campamentos de turismo, oficinas de la Administración y otros), estableciendo cuándo prima más el criterio de máxima concentración geográfica frente al de máxima dispersión en la prestación del servicio por tipos y subtipos de equipamiento.

3. Esquema general de distribución de áreas industriales.

Establece los criterios generales para la planificación de nuevo suelo industrial y el tratamiento del existente desde puntos de vista que combinan su necesidad de concentración en la zona central con la conveniente y gradual creación de cierta infraestructura industrial en las periferias este y oeste de la región, la introducción de medidas de protección ambiental, la mayor compatibilidad entre usos industriales y terciarios y la especial atención a la industria dispersa vinculada al medio rural en cuanto que pueda ser ubicada en pequeños "polígonos" industriales.

4. Bases para la reordenación urbanística del enclave central en torno a Lugones.

Establece los criterios para la compatibilización, a posteriori de su aprobación, de los planes generales de Oviedo, Siero y las Normas Subsidiarias de Llanera en el área "supercentral" de Asturias.

5. Criterios para la actuación en cascos urbanos y rurales y para la delimitación de áreas de rehabilitación integrada.

Establece las pautas generales por las que se habrían de emprender programas de rehabilitación, no sólo en cascos con valor histórico-artístico, sino en suburbios residenciales de reciente creación que no destacan precisamente por sus valores arquitectónicos ni urbanísticos.

Basadas en la protección del medio natural

6. Medidas para la ordenación, preservación y potenciación del medio natural.

Se seleccionan cuarenta espacios de variada extensión (desde todo un municipio ya declarado por el Principado Parque Natural como Somiedo, hasta un punto singular como una playa) para el establecimiento de especiales medidas de protección, ya sea en aplicación de la Ley 4/89 de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres o de la propia Ley del Suelo mediante planes especiales, como el que actualmente se tramita para la Ría de Villaviciosa.

7. Medidas para la regulación de la edificación en el medio rural.

Considerando como medio rural todo aquel territorio que el planeamiento urbanístico municipal vigente clasifica como suelo no urbanizable, el objetivo básico de esta Directriz consiste en la revisión de los mecanismos de acción territorial vigentes a fin de lograr un mayor control sobre la edificación en el medio rural, bajo la premisa de todo él es sujeto de protección y potenciación de su explotación racional y no sólo las áreas especialmente señaladas en la Directriz anterior.

Se propugnan medidas muy restrictivas hacia la edificación dispersa de carácter no agrario y, en consecuencia, la canalización de la demanda de segunda residencia hacia el interior o zona de colindancia de los núcleos rurales (adecuándose a la tipología edificatoria de éstos) o hacia la creación de nuevas urbanizaciones de promoción privada incluso segregadas de los actuales núcleos urbanos y rurales.

Por último, se establecen los tipos de actuaciones sujetos a estudio de impacto ambiental y a estudio de impacto estructural, con lo que se cierra el cuerpo propositivo del Avance de Directrices Regionales de Ordenación del Territorio.

Fernando Arrojo Martínez

Ingeniero de Caminos

Director Regional de Urbanismo y
Ordenación del Territorio

LAND PLANNING IN THE PRINCIPALITY OF ASTURIAS

The article goes over the land planning instruments applicable in the Principality of Asturias, from municipal town planning —definitively approved in 60 of the region's 78 municipalities—, the Regional Development Regulations for the Countryside drawn up on a complementary and provisional basis until the aforementioned general plan comes into force, to the Land Planning and Co-ordination Law as a characteristic feature of the Principality and which contains the basic instruments for land planning, namely the Guidelines, the Territorial Action Programmes and the Impact Appraisals.

Following on from this, a summary is given of the Regional Land-Planning Guidelines document (likewise passed as a planning Preview and foreseeably in force as from 1990), and stress is laid on the fact that the population

and activities are heavily concentrated in the central area (at the present time, 72 % of the population is concentrated in this part of the region which accounts for 14 % of its total surface area), as well on the objective of rebalancing the area in order to reach the necessary point of inflection which will help to keep and fix both population and activities in the outlying areas of the region.

Apart from a few brief methodological references as to the approach followed in the Guidelines, the article gives a succinct description of the contents of each of the seven big Guidelines mentioned in the Preview, approaching the matter from three different angles:

- Defining the **nucleus-forming outline of the region** as a polarizer for the various kinds

of equipment and infrastructures and which, far from being an institutionalized local organization system, will rationalize the providing of public and private services by seeking a balance between the concentration of equipment and services (scale economy) and the necessary de-concentration of these in accordance with the particular dispersed type of habitat to be found in the region.

- Defining the **protected areas**, taking into account their natural, cultural, social or economic value, as a basis for bringing in measures and setting up actions plans for the territory, the aim of which is to recover or preserve certain areas.

- Determining those types of intervention that are subject to an environmental and/or structural impact study.